

## Electoralismo de baja intensidad en Sudamérica: disfuncionalidades por defecto

Laurence Whitehead (Senior Research Fellow, Nuffield College, University of Oxford)

*Trad. Luciana Solórzano Salcedo (FCA-UNAM)*



Las nueve repúblicas latinoamericanas de Sudamérica han celebrado elecciones regulares para cargos públicos durante al menos una generación. Los métodos violentos alternativos de reasignación del poder (golpes de Estado, insurrecciones, invasiones, etc...) parecen relegados a la historia, y es poco probable que regresen con fuerza en el corto plazo. Pero, aunque el electoralismo pueda ser la única opción predeterminada que aún permanece en pie, despierta escaso afecto. Los recientes entusiasmos por innovaciones de democracia directa, el “nuevo constitucionalismo” o la “marea rosa” ya han alcanzado su punto máximo y luego se han desvanecido. El chavismo, el bolsonarismo, los estallidos sociales y los acuerdos de paz han resultado decepcionantes. Los partidos y los Congresos son ampliamente impopulares, y los líderes personalistas tienden a pronto generar tanta resistencia como apoyo. El resultado típico es un estancamiento político incómodo. Se desconfía de los políticos y se los sospecha de corrupción algunos incluso capturados por intereses criminales, mientras que las aspiraciones ciudadanas siguen desatendidas y el debate público carece de contenido creíble. Por supuesto, cada país enfrenta una combinación específica de estas características, y algunos tienen mejores perspectivas de reforma que otros. Pero en general, tales disfuncionalidades están arraigadas, con la consecuencia de que la política democrática carece de convicción o de sentido de dirección.

### **i) Un panorama de la política de Sudamérica contemporánea.**

Un problema recurrente al construir panoramas que abarquen a toda América Latina es cómo delinear los rasgos comunes que caracterizan a esta región heterogénea, sin ocultar la diversidad, inestabilidad y contingencia de los distintos episodios y trayectorias específicas que se manifiestan en cada nación. En este caso, se abordan los procesos políticos en las nueve repúblicas latinoamericanas de Sudamérica a inicios de la década de 2020. Los títulos seleccionados para un tratamiento comparativo son: “electoralismo por defecto”, “disfunciones democráticas” y “ausencia de dirección política”. Estos tres elementos ofrecen un resumen funcional del patrón general de la política actual en el subcontinente.

Y, sin embargo, Venezuela parece burlarse una vez más del primer punto; Uruguay puede reclamar cierto éxito en superar el segundo; y la nueva administración en Argentina parece decidida a liberarse del tercero. Entonces, ¿realmente existe un marco único que abarque tendencias tan centrifugas y que pueda aportar valor frente a las diversas tendencias que se evidencian en cada caso?. A pesar de sus divergencias, estos sistemas políticos interactúan y comparten puntos de referencia comunes que reflejan una visión colectiva. Si Maduro logra inclinar aún más el terreno electoral de Venezuela a su favor, eso enviará un mensaje de aliento a otros políticos sudamericanos tentados a aplicar prácticas similares. Si Uruguay consigue mantener un equilibrio democrático liberal relativamente eficaz, eso también tendrá implicaciones a nivel regional. El resultado del experimento libertario radical de Milei también es relevante más allá de los límites de Argentina (véase Welp en esta colección).

La distribución actual de alternativas es inestable y, de hecho, reversible. Después de todo, cuando la dictadura militar argentina ocupó las Islas Malvinas (Falklands), Caracas era ampliamente percibida como la opción constitucional más responsable y democrática de Sudamérica. Hoy es Uruguay quien ocupa esa posición, aunque entonces su perfil era muy desfavorable. De forma similar, en aquel momento Ecuador y Perú eran vistos como ejemplos de transiciones democráticas ejemplares, mientras que hoy se consideran advertencias sobre disfuncionalidades democráticas.

Considerando esta variabilidad geográfica y temporal, y teniendo en cuenta las interdependencias que también moldean los resultados políticos a nivel regional, podría obtenerse cierto beneficio analítico de este breve ejercicio de balance panorámico. Estas nueve “democracias electorales”, en mayor o menor grado, pueden estudiarse dentro de un mismo marco, siempre que los límites exteriores de este conjunto de casos se tracen de forma flexible y se evite asumir una convergencia política acumulativa. Los tres ejes interconectados de este artículo aún pueden resultar útiles si se emplean para identificar los “camino no tomados” en trayectorias individuales, y si el caleidoscopio resultante de alternativas políticas en pugna se entiende como experimentos interactivos y potencialmente reversibles, más que como proyectos estables o regímenes democráticos “consolidados” y seguros.

Los resultados actuales pueden ser relativamente resilientes, generados por más inercia y por defecto que por ser el resultado de diseños coherentes destinados a una implantación permanente y legítima. Siguen surgiendo proyectos rivales que compiten por imponerse, pero cada uno genera suficiente resistencia como para provocar un nuevo estancamiento; así, cada experimento sigue su curso más por defecto que por un entusiasmo irresistible. Los ciudadanos pueden habituarse a las salidas limitadas que logran encontrar, pero como la aceptación resignada suele ser más común que el respaldo entusiasta al orden político vigente, muchos votantes conservan la posibilidad de desertar o de buscar alternativas cuando las circunstancias lo dicten o cuando los sentimientos colectivos cambien de rumbo.

Dado este amplio marco comparativo, se requieren algunas precisiones adicionales para completar el panorama. A continuación, se explorarán con más profundidad los tres ejes mencionados anteriormente, haciendo referencia a un ejemplo pertinente. Bolivia ha sido elegida como un punto de referencia adecuado, es decir, como un país que encarna las características relevantes de manera bastante representativa e ilustrativa. No se presenta como un caso “ejemplar”, sino simplemente como pertinente para todos los problemas

recién mencionados. Bolivia se utiliza aquí para arrojar luz sobre cada uno de los tres temas propuestos, así como sobre sus interconexiones. Bajo cada encabezado, las especificidades de Bolivia contemporánea también pueden contextualizarse en relación con los patrones comparables observables en las naciones vecinas.

## **ii) Electoralismo por defecto.**

Las nueve repúblicas sudamericanas son actualmente regímenes “electorales”, lo que significa que la designación o renovación de los cargos públicos está regulada mediante votaciones periódicas. No todas estas elecciones son plenamente “democráticas”, ya que en algunos casos –especialmente en Venezuela– los procesos electorales están tan manipulados y son tan injustos que los partidos y candidatos de oposición tienen pocas posibilidades reales de éxito, por mucho respaldo ciudadano que tengan.

En Paraguay, por ejemplo, el Partido Colorado es el vencedor casi invariable desde la década de 1940 y durante los 35 años de la dictadura de Stroessner. Fue el único partido legal entre 1947 y 1962, y ha ganado todas las elecciones desde entonces, salvo el periodo de 2008-2013, por lo que las posibilidades de alternancia son conocidas por ser remotas. En Perú, por el contrario, prevalece la situación opuesta: ningún presidente desde la caída del dictador Fujimori en el año 2000 ha sido reelecto, y los seis ex presidentes vivos están en prisión o enfrentan procesos penales. Así, el simple hecho de que se celebren elecciones de forma regular y que sean disputadas no garantiza la existencia de una democracia política con sentido.

De hecho, el ideal liberal de un proceso electoral neutral y despolitizado que garantice una “cancha pareja” para la competencia entre partidos es más bien un triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Las realidades de la historia electoral de Estados Unidos incluyen el legado duradero del vicepresidente Jefferson, Elbridge Gerry (diseñador del “gerrymandering”), hasta las elecciones presidenciales “robadas” de 1876 y 1960, o el asalto al Congreso del 6 de enero de 2021.

Todas nuestras nueve democracias sudamericanas han registrado episodios análogos, incluyendo recientemente el fallido intento de un presidente peruano de cerrar el Congreso; el asesinato en plena campaña de un candidato presidencial en Ecuador; el asesinato de 37 candidatos en las elecciones locales de México; y la torpe imitación de Bolsonaro del asalto al Congreso perpetrado por Trump. Todos estos episodios ponen en evidencia lo infundado (contra natura) de los supuestos que sostienen los modelos estándar de electoralismo en la ciencia política.

El análisis convencional se centra principalmente en el tema de los límites de mandato y las reformas para la reelección. Sin embargo, la historia comparada revela un fenómeno mucho más profundo. Todos los aspirantes al poder valoran la integridad electoral cuando desafían por primera vez a los gobernantes en funciones, y muchos continúan respetando las reglas más o menos tras una victoria inicial. Pero, una vez en el poder, el equilibrio de los incentivos cambia: se orienta hacia evitar futuras derrotas, y la mayoría de los gobernantes electos comienzan a idear estrategias para perpetuarse.

Cuanto más firmemente logran imponerse, más difícil se vuelve aceptar un eventual veredicto electoral adverso. Algunos—como Hugo Chávez— puede que nunca hayan tenido la intención de aceptar una reversa, mientras que otros pueden ir evolucionando poco a poco hacia opciones más iliberales. Actuar de este modo es arriesgado, ya que tiende a dividir a los propios simpatizantes y a provocar a los opositores. El electoralismo por defecto abarca esta gama de consideraciones, mientras que el idealismo liberal tiende a ignorarlas.

Sin embargo, incluso estas variantes defectuosas del electoralismo siguen imponiendo límites a las carreras políticas, en contraste a las alternativas como el gobierno hereditario, el pretorianismo, o el exclusivismo de partido único. Establecen un principio político discutible: que el ejercicio del poder es un mandato temporal otorgado por el pueblo, un mandato que requiere renovación formal en intervalos periódicos preestablecidos.

A partir de este principio se derivan algunas consecuencias importantes. La sucesión en el cargo está sujeta a un límite temporal, y la continuidad en el poder no se determina únicamente por el linaje, el rango militar o la designación interna del partido, sino que—al menos en teoría y especialmente en momentos de crisis de sucesión— depende de una expresión pública de respaldo. Cada elección también representa un momento de deliberación colectiva: ¿qué opinan los ciudadanos sobre los logros pasados del gobernante, sus intenciones futuras, la selección de sus colaboradores, etc?. El electoralismo por defecto es el sistema mediante el cual estas cuestiones se canalizan a través de un proceso de votación, en lugar de manejarse de formas más arbitrarias e impredecibles. Las restricciones asociadas al ejercicio del poder coordinan las expectativas públicas y amplían los horizontes temporales, aunque la dependencia de un calendario electoral fijo también introduce rigideces en el cronograma de formulación de políticas.

La historia política de Bolivia desde el año 2000 ofrece una buena ilustración de todo lo anterior, incluyendo la marginación de otras posibilidades para asignar cargos públicos y la divergencia que puede surgir entre el electoralismo y las alternancias plenamente democráticas en el poder. La trayectoria de Evo Morales representa aquí un caso de estudio ejemplar. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), promovió la integridad electoral y presentó una crítica efectiva al modelo previo de “partidocracia”. Reformó la Constitución, introduciendo mejoras con un carácter democratizador como los referendos revocatorios, la elección directa de la alta judicatura, etc. El mandato presidencial se limitó a cuatro años con una posible reelección, pero Morales logró descartar su mandato anterior, por lo que, para 2019, ya había gobernado de forma continua durante 14 años.

Para entonces, la perspectiva de dejar el poder resultaba tan intolerable para el MAS que optó por convocar un referéndum para extender su mandato aún más. Al perder por escaso margen, recurrieron a los tribunales que ellos mismos habían designado, los cuales, de forma perversa, dictaminaron que no se podía negar la candidatura del mandatario, ya que esto constituía un derecho humano inviolable. Esta versión abusiva del electoralismo por defecto produjo la crisis y el colapso constitucional de 2019, tras lo cual Morales se exilió denunciando un “golpe de Estado”. Eventualmente se celebraron nuevas elecciones (el principio del mandato electo seguía siendo aceptado por todos los actores), y el MAS volvió a la presidencia, aunque ya no en la persona de Morales. Sin embargo, dado que él es el fundador del partido y sus estatutos le reconocen liderazgo vitalicio, Morales se ha

proclamado el único candidato legítimo para la contienda presidencial de 2025. Cualquiera que sea el veredicto de esa elección, esto constituye un ejemplo claro de electoralismo por defecto, más que de integridad electoral liberal.

Sin duda, el sistema actualmente vigente en Bolivia se aleja del ideal de una democracia plenamente “consolidada”, pero, como se ha visto, ese podría ser un estándar imposible para juzgar las opciones políticas reales del país. Vale la pena subrayar que, a pesar de sus fallas, este régimen sigue ofreciendo un marco generalmente aceptado para la resolución de disputas, y garantiza una aceptación colectiva (a regañadientes, precaria, pero relativamente duradera) de las autoridades constituidas. Sus tensiones e inconsistencias podrían contribuir a gestionar los conflictos de intereses y las incompatibilidades de visión del mundo que estructuran la vida política boliviana. Puede decirse que el electoralismo por defecto es la opción de régimen más viable del país, al evitar otras vías más violentas y destructivas— los “caminos no tomados”—. Sobre esta base, la trayectoria política de Bolivia parece bastante representativa de los patrones que actualmente prevalecen en buena parte del subcontinente.

### **iii) Disfunciones democráticas.**

Aunque el electoralismo por defecto pueda ser generalizado y resistente en la Sudamérica contemporánea, existe abundante evidencia proveniente de encuestas y otros indicadores que lo califican como profundamente insatisfactorio. Puede que no existan alternativas disponibles o que las existentes sean reconocidas como aún peores, pero este no es un régimen político que despierte simpatías. Bajo los criterios estándar de legitimidad (de entrada, de procedimiento, de resultados y de reconocimiento internacional), obtiene calificaciones deficientes. Esta sección resume una serie de resultados insatisfactorios que son atribuibles, al menos en parte, al sistema político predominante en la región.

Comenzando con la legitimidad de entrada, en los sistemas electorales representativos, la teoría clásica considera que los partidos políticos y los sistemas de partidos son factores críticos. Durante gran parte del siglo XX, Sudamérica fue el hogar de partidos políticos importantes y duraderos (como el APRA, el MNR, el peronismo, etc.), así como de sistemas bipartidistas sólidos y arraigados en países como Colombia, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, en la década de 2020, muchos de estos partidos y sistemas se encuentran fragmentados o en crisis. Ya no atraen activistas, no articulan intereses sociales ni elaboran proyectos programáticos como antes. Las encuestas de opinión suelen colocar a los partidos y congresos entre las instituciones públicas menos populares o confiables. Los ciudadanos jóvenes, en particular, son poco propensos a identificarse con algún partido y a menudo presentan tasas de abstención electoral inusualmente altas. Este canal bidireccional que conectaba a los ciudadanos con los políticos ya no funciona como solía hacerlo (véase Palestini en esta recopilación).

Sobre los procesos democráticos, el conflicto clave de la integridad electoral ya se abordó en la sección anterior. Otro ámbito de preocupación debería ser el estancamiento institucional. Particularmente, los estancamientos entre el poder ejecutivo y el legislativo obstaculizan frecuentemente la formulación racional de políticas. El estancamiento entre Maduro y la Asamblea Nacional es una ilustración extrema, pero Venezuela no es una excepción. La “muerte cruzada” en Ecuador es casi igual de drástica. En Perú, el Congreso

ha acosado a ministros y ha destituido a presidentes sin contención durante años. También hay otras múltiples disfunciones procesales a lo largo de la región.

La mayoría de las experiencias negativas que afectan la satisfacción ciudadana con el orden político no se ubican tanto en la categoría de entrada o de procedimiento, sino en el lado de los resultados. Es importante aclarar que, debajo de este encabezado, aparecen muchos resultados negativos que no deberían atribuirse únicamente al funcionamiento del régimen político. Por ejemplo, los malos resultados económicos a menudo se deben a fuerzas sobre las que los gobiernos tienen un control limitado, lo mismo ocurre con los desastres naturales. Sin embargo, cuando Argentina incurre nuevamente en impago de su deuda soberana, o cuando una sequía reduce a la mitad su cosecha de soja, los ciudadanos no se equivocan al responsabilizar en parte a sus gobernantes.

Otras disfunciones más directamente políticas incluyen escándalos de corrupción, la incapacidad para controlar el crimen organizado, o la mala gestión de los flujos migratorios. En el artículo "The Danger of Democratic Delinquency" (Journal of Democracy, vol. 32, n.º 3, págs. 78-93), he señalado las "delincuencias democráticas" como una importante legitimación para la región, que abarca las dimensiones de insumo, proceso y resultado.

Finalmente, los juicios internacionales también afectan la legitimidad y el buen funcionamiento de estos regímenes políticos. Aprobaciones condicionadas del FMI, sanciones por parte de Estados Unidos, fallos internacionales en materia de derechos humanos, e incluso audiencias judiciales en el extranjero pueden mitigar o evidenciar las percepciones internas sobre el mal desempeño gubernamental. En conjunto, estas cuatro dimensiones determinan en gran medida la situación actual de los regímenes electorales en Sudamérica.

También en este punto Bolivia ofrece una ilustración pertinente del patrón general. Durante un tiempo, el ascenso del MAS proyectó una imagen atractiva sobre las posibilidades transformadoras del país, pero sus divisiones y deficiencias actuales están generando dudas y desmoralización. Durante aproximadamente una década, el partido dominante disfrutó de un poder ejecutivo unificado, respaldado por una mayoría de dos tercios en el poder legislativo y una judicatura afín. Sin embargo, ahora existe un estancamiento institucional que podría resultar difícil de superar. En cuanto a los "resultados", una serie de logros generó popularidad hasta que el gobierno de Morales se excedió, el contexto económico se deterioró y los gobiernos vecinos se volvieron menos comprensivos. Hoy en día, no todo el panorama es sombrío (Bolivia sigue en una posición relativamente buena en comparación con algunos de sus vecinos y con su propio pasado), pero la convivencia democrática vuelve a estar bajo presión y las mejoras futuras podrían ser difíciles de concretar.

#### **iv) Procesos sin dirección.**

Los ciudadanos pueden sentirse decepcionados por las disfunciones políticas que enfrentan, y desmoralizados por experiencias pasadas de mala gobernanza, pero a la vez energizados por la convicción de que, finalmente, las autoridades se han dado cuenta de la necesidad de reformas y están listas para superar las malas prácticas. Es posible que el nuevo gobierno de Argentina logre construir una narrativa de este tipo, y que la

administración de Milei consiga generar el impulso necesario para lograr un cambio fundamental en la dirección política del país. Estos impulsos transformadores han sido previamente defendidos por, entre otros, los presidentes Perón, Onganía, Alfonsín, Menem y Kirchner. Estos precedentes indican que, aunque un impulso de cambio radical puede ser liderado desde arriba, los resultados duraderos y acumulativos también requieren un diseño adecuado y la construcción de coaliciones de apoyo sólidas (véase Welp en esta colección).

Aparte del experimento altamente provisional que acaba de iniciarse en Argentina, en el resto de Sudamérica lo que observamos no es solo una democracia por defecto con disfunciones democráticas, sino también la ausencia de fe en una mejor alternativa. Antes del cambio de siglo, las versiones neoliberales de democratización atrajeron un gran seguimiento en varios países; en la década siguiente, las fórmulas de la “marea rosa” ofrecieron un sentido alternativo de dirección. Pero en la década de 2020, ninguna doctrina o proyecto equivalente goza de un apoyo similar. En casi todos los casos, lo máximo que se puede encontrar son variantes atenuadas y disminuidas de agendas previamente más ambiciosas. En las mejores condiciones, puede surgir algo de impulso vacilante y limitado, pero el clima general es de escepticismo y desilusión.

Una posible explicación de este patrón es que el compromiso popular con todas las variedades de actividad política se ha disipado. La caída en la participación electoral, el colapso de la información en los medios, la insensatez de las redes sociales, la pérdida de interés por las ideas políticas, o simplemente el retiro de una esfera pública que ya no ofrece ninguna convicción, podrían señalar en esta dirección. Otra posibilidad alternativa sería la polarización y la parálisis. Aquí no es que a nadie le importe la política, sino que aquellos que sí se interesan se contrarrestan entre sí, generando parálisis. Por ejemplo, los diversos contendientes por el poder en Ecuador promueven cada uno activamente una dirección política deseada, pero sus esfuerzos vigorosos solo sirven para vetar los planes de los demás.

Más allá de estas opciones esquemáticas, podría ser que en coyunturas históricas limitadas en el tiempo todos los proyectos y expectativas anteriores se suspendan por una contingencia imprevista, como la crisis de deuda de 1982 o la pandemia de 2020/21. El balance entre estas alternativas puede cambiar de país a país, siendo Venezuela un ejemplo marcado por el trauma de la fuga de refugiados, mientras que Colombia encontró algo de consuelo limitado en la esperanza de un acuerdo de paz, y Brasil retuvo el suficiente impulso político para mantener una última reactivación bajo Lula y su PT. El “estallido social” de Chile en 2019 generó una erupción de energías políticas latentes que al principio parecían capaces de volcar todo un régimen, pero que posteriormente perdió fuerza y terminó sin una dirección coherente (véase Palestini en esta colección)...

Una vez más, Bolivia contemporánea ofrece una ilustración relevante. Durante dos décadas, tras su fundación a finales de los años 90, el MAS defendió un proceso transformador ambicioso y claramente delineado. La “descolonización” proporcionó la narrativa principal, y Evo Morales encarnó la sustancia del proyecto. El exilio de Evo representó un esfuerzo decidido por revertir este impulso, pero al cabo de un año la resistencia resultó insuficiente. Al igual que en Chile, el aparente punto de inflexión de 2019 generó una visión de discontinuidad radical que pronto resultó insostenible. Así como la derecha chilena repuntó sin recuperar completamente su hegemonía, también el MAS de

Bolivia regresó al poder, pero ya no unido en torno a un propósito común. Quizá la epidemia de covid desempeñó un papel en desorientar estos procesos, pero al menos por el momento, ambos siguen bastante sin dirección.

#### **v) Riesgos y Potencial de Recuperación.**

Como una generalización inductiva, este artículo propone el “electoralismo por defecto”, las “disfunciones democráticas” y la “política sin dirección” como las principales características prevalentes que modelan los asuntos públicos en Sudamérica a mediados de la década de 2020. Si bien estos arreglos se combinan en una diversidad de patrones a través de los nueve países analizados, también se refuerzan mutuamente y muestran un alto nivel de inercia. Por un lado, la imagen general de la actividad política que emerge parece probable que se reproduzca por algún tiempo, en ausencia de algún shock o agitación mayor. Pero, al mismo tiempo, este no es un estado deseable ni para los actores de élite ni para la ciudadanía en general. Así que esta parálisis se basa en cimientos débiles, lo que hace probable que sea reemplazada por algo diferente a su debido tiempo. Esto sugiere dos perspectivas posibles a medio plazo: un riesgo de colapso y una oportunidad de recuperación.

El principal riesgo se conoce comúnmente como “retroceso democrático”, aunque esa terminología resulta algo engañosa. Parte de un ideal implausible e históricamente nunca experimentado de “igualdad de condiciones” en la política, y luego culpa a ciertos actores por no cumplir con sus obligaciones autoevidentes. Pero este no es un relato viable de cómo los contendientes reales por el poder podrían esperar sobrevivir y prosperar, ni refleja lo que realmente espera la opinión pública de ellos. Existen ciertas reglas y convenciones que restringen la acción política, y que son costosas de violar, pero estas se han destilado de dos siglos de aprendizaje y experiencia republicana, y no pueden reducirse a las pías idealistas del liberalismo.

Por ejemplo, disputar elecciones es costoso, y los candidatos tienen fuertes incentivos para recaudar dinero en condiciones cuestionables. Es probable que acusen a sus rivales de “corrupción”, mientras que adoptan una postura más indulgente con esta conducta cuando se lleva a cabo en su beneficio. De igual manera, las decisiones judiciales que se inclinan a su favor pueden ser vistas con indulgencia, mientras que los fallos adversos se asumen fácilmente como abusos partidistas. Es inadecuado culpar solo a los incumbentes por todo esto, ya que los desafiantes y los actores externos pueden tener más que ganar y menos que perder al sobrepasar los límites de la decencia. Ciertamente, el concepto de “democracia delegativa” de Guillermo O’Donnell captura un elemento importante de la verdad sobre el presidencialismo latinoamericano, pero los actores legislativos, judiciales, subnacionales e informales a menudo participan de manera igualmente plena en prácticas sociales profundamente arraigadas de chantaje, tarot doble, financiamiento ilícito, captura institucional y guerra jurídica (lawfare).

En la práctica, muchos de los procedimientos legales considerados “lawfare” (guerra jurídica) por las partes acusadas son en realidad de múltiples capas y difíciles de desenmarañar. Lo que puede parecer una persecución injusta también puede ser considerado, desde otro punto de vista, actos necesarios de aplicación de la ley. Una reevaluación desapegada podría contradecir ambas posiciones al descubrir incompetencia y

desorden. El acusado con mayor resistencia y más recursos puede, por lo tanto, seguir luchando con la razonable esperanza de que el fallo eventual se incline a su favor. Pero los demás pueden prepararse para una justicia arbitraria y no apelable.

El principal riesgo sistémico es que estas variantes entrelazadas de política sucia puedan escalar hasta convertirse en una “guerra de todos contra todos”, eliminando todos los frenos previos y las restricciones prudenciales. En gran parte de la Sudamérica contemporánea, estos riesgos son palpables, pero, por otro lado, cuando amenazan con adquirir un impulso de suma negativa, también pueden intensificar el enfoque en la acción correctiva. Por esta razón, tanto el riesgo como la recuperación deben ser analizados en tándem, y tiene sentido examinar las dinámicas políticas en términos de “oscilaciones” en lugar de movimientos unidireccionales.

La Bolivia contemporánea ejemplifica claramente estas posibilidades oscilatorias. El presidente Arce y su equipo controlan el ejecutivo hasta las elecciones de 2025. Pero la división del MAS significa que ya no pueden contar con una mayoría en el legislativo, y su derecho a gobernar está siendo cada vez más impugnado. La autoridad del poder judicial también está en duda, ya que los jueces principales (cuyo mandato acaba de terminar) no fueron reemplazados en su momento y, por lo tanto, extendieron inconstitucionalmente su propio mandato hasta que se celebren nuevas elecciones, lo que en sí mismo es otro tema polémico. La integridad y continuidad judicial son fundamentales en cualquier sistema constitucional, pero aún más después del supuesto “golpe de Estado” de 2019, que dejó al presidente anterior y al gobernador elegido de la región más grande del país tanto en prisión como enfrentando juicios que sus seguidores consideran actos de venganza.

En la misma línea, la facción disidente del MAS promete juzgar a Arce el día después de que termine su presidencia, mientras que la facción del partido de Arce niega la elegibilidad de Evo Morales como candidato para sucederlo en 2025. Más allá de estas complicaciones sobre las instituciones formales, otras disfunciones democráticas también oscurecen la escena política. Diversos sectores regionales y sociales bloquean importantes carreteras como táctica de presión para reforzar sus demandas seccionales. El narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada penetran partes estratégicas de la economía. La visión programática original que solía unificar al MAS ha dado paso a un conjunto incoherente y de suma negativa de interacciones que, en lugar de ofrecer esperanza, amenaza a la población con una creciente discordia.

En resumen, Bolivia muestra actualmente la parálisis y disfuncionalidad que tienden a prevalecer en la Sudamérica contemporánea, y enfrenta los riesgos asociados de desmoronamiento a medio plazo. Sin embargo, sería un error unilateral descartar el potencial restante para una eventual recuperación de este estancamiento. Como se ha mencionado, el electoralismo sigue regulando la asignación de cargos públicos y la elección de políticas públicas. El estado de derecho puede ser desordenado y propenso a la guerra jurídica (lawfare), pero sigue en pie y podría ser susceptible de reparación. Las prácticas iliberales y los delitos criminales evidentes representan una amenaza seria, pero no necesariamente aniquilarán los factores positivos que también están presentes. Estos incluyen las corrientes de opinión pública lo suficientemente fuertes como para distinguir entre posiciones aceptables y tácticas de chantaje y engaño, o para rechazar opciones violentas y socialmente destructivas como las desatadas en la crisis de 2019.

Espectáculos como el asalto al Congreso brasileño o la dura represión a los seguidores del expresidente Castillo en Puno también pueden tener un efecto aleccionador; y ningún líder boliviano responsable quiere replicar los desórdenes económicos que actualmente aquejan a Argentina. La evidencia de los países vecinos de Sudamérica, junto con las lecciones desalentadoras del propio pasado reciente de Bolivia, tiene el potencial de fomentar el compromiso y la construcción de coaliciones que podrían abrir el camino hacia algún grado de recuperación. Ni en Bolivia ni en el subcontinente en su conjunto se pueden descartar completamente estas posibilidades de recuperación. De hecho, Andrés Malamud argumenta no sólo a favor de la “resiliencia” democrática, sino incluso por las características de “antifragilidad” de los regímenes regionales (ver Malamud en esta colección).

#### **vi) América del Sur en perspectiva comparativa.**

En este relato, Bolivia ofrece una ilustración útil del estado actual de la política en toda América del Sur; al mismo tiempo, el subcontinente es heterogéneo y está sujeto a tendencias centrífugas. Lo mismo ocurre con otras grandes regiones como África, MENA o incluso el Caribe. Venezuela podría ser comparada con Cuba y Nicaragua. Uruguay puede compararse con varios países mediterráneos. Chile puede asociarse con Taiwán, y algunos han comparado Brasil con Sudáfrica. En resumen, no hay una línea de demarcación fuerte que separe a América del Sur de otras regiones, por lo que tampoco hay una buena razón para asumir que las generalizaciones inductivas sobre las nueve repúblicas contiguas de esa región sólo son relevantes para este conjunto de casos.

De hecho, el electoralismo por defecto puede encontrarse en partes de cualquier gran región mundial, por ejemplo, en Sudáfrica o en Líbano. Así también, disfunciones democráticas como sistemas de partidos rotos o la penetración criminal de la esfera pública pueden surgir en India o Nigeria. Lo mismo ocurre con la política sin rumbo (desconexión post-liberal en Europa; desilusión con todas las alternativas en Pakistán, etc). Las tres características también pueden operar en combinación fuera de América del Sur, por ejemplo, en México (probablemente se vuelva sin rumbo después de que AMLO deje el cargo) o en Filipinas (lo mismo bajo el dúo Marco/Duterte).

Este artículo no tiene la intención de promover el parroquialismo, sino todo lo contrario. Si este análisis proporciona una visión de las realidades políticas actuales de América del Sur, entonces, por supuesto, sigamos explorando cómo se aplican en otros lugares. Puede ser que lo que se ve más vívidamente en este contexto geográfico particular también esté en operación de manera más general. Tendencias similares podrían estar desarrollándose incluso en los EE. UU.: electoralismo, pero con un campo de juego mucho más sesgado; parálisis institucional, guerra jurídica (lawfare) y el triunfo de la política del dinero; incluso la posibilidad de que, después de que Trump regrese a la presidencia o se desvanezca, la política estadounidense podría quedar relativamente “sin rumbo”.

Probablemente la implicación más universal de este panorama inductivo regionalizado sea que los regímenes electorales en su conjunto pueden fácilmente caer en estancamientos de baja satisfacción y débil legitimidad. Esta perspectiva, más que la confrontación heroica con enemigos autoritarios o el vergonzoso “retroceso” de la consolidación democrática idealizada, podría comprobar el desafío político de la era actual. Si es así, las fuerzas que

generan la “oscilación” entre el colapso y la recuperación requerirán un análisis comparativo más profundo. Y las actuales tribulaciones de América del Sur, lejos de ser un espectáculo marginal, podrían convertirse en un laboratorio crítico para estudios políticos más amplios.

Whitehead, Laurence. "Low-intensity electoralism in South America: Default dysfunctionalities", ponencia presentada en Canning House, *mimeo*, 13 pgs., 9 de abril del 2025.

Wednesday 9 April 2025

08:45 - 18:30 (GMT -6)

Sofitel Mexico City Reforma

297 Avenue, Av. P.º de la Reforma, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, México.